

Tratamiento de datos en Web de contactos. Informe 469/2006

La consulta plantea diversas cuestiones en relación con la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, al fichero de contactos que se describe en la misma.

En primer lugar, las preguntas contenidas en los apartados 2,3 y 4 de la consulta se refieren al sometimiento del fichero creado a lo dispuesto en la Ley Orgánica, teniendo en cuenta el contenido del mismo que se describe en el apartado 1.

Debe, en este punto, indicarse que las conclusiones que se alcancen al responder a esta cuestión serán aplicables tanto en el supuesto de obtención de los datos por medio de correo electrónico como cuando los datos sean incorporados a un fichero como consecuencia de su remisión al afectado a través de un mensaje telefónico de texto. En ambos casos, cabrá considerar que se produce un tratamiento de los datos, procediendo a su inclusión en un único fichero en caso dado que existirá un único conjunto estructurado de datos contenidos en el mismo, con independencia de su origen, siendo también única la finalidad que justifica ese tratamiento, dándose así respuesta a lo planteado en el apartado 10 de la consulta.

En este sentido, el artículo 2.1 de la Ley Orgánica dispone establece que “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”.

Por su parte, el artículo 3 a) de dicha Ley añade que se entenderá por datos de carácter personal “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En este mismo sentido se pronuncia el artículo 2 a) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos profesionales y a la libre circulación de estos datos, que dispone “toda información sobre una persona física identificada o identificable (el «interesado»); se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”.

Para interpretar cuándo ha de considerarse que nos encontramos ante un dato de carácter personal esta Agencia ha venido siguiendo el criterio sustentado por las distintas Recomendaciones emitidas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en las que se indica que la persona deberá considerarse identificable cuando su identificación no requiere plazos o actividades desproporcionados.

De este modo, dado que, en primer lugar, aunque sea posible que no se produjera la inclusión en el fichero de los datos de nombre y apellidos del afectado, dado que en todo caso se incluirán en el mismo datos tales como su número de teléfono, dirección de correo electrónico, dirección IP y fotografía, además de admitirse un campo libre de información, cabe considerar que el fichero al que se refiere la consulta se encuentra sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica, incluso en el supuesto de que aquél no incluyese los datos de nombre y apellidos de los afectados.

En particular, respecto de la dirección de correo electrónico, esta Agencia ha tenido reiteradamente la ocasión de pronunciarse en relación con su sometimiento a la Ley Orgánica, así cabe hacer referencia al informe de 19 de septiembre de 2001, en que se señalaba lo siguiente:

“La dirección de correo electrónico se forma por un conjunto de signos o palabras libremente elegidos generalmente por su titular, con la única limitación de que dicha dirección no coincida con la correspondiente a otra persona. Esta combinación podrá tener significado en sí misma o carecer del mismo, pudiendo incluso, en principio, coincidir con el nombre de otra persona distinta de la del titular.

Un supuesto habitual en el diseño de direcciones de correo electrónico, en el que se encontrarían los dos ejemplos facilitados en la consulta, es aquél en que, voluntaria o involuntariamente, la dirección contiene información acerca de su titular, pudiendo esta información referirse tanto a su nombre y apellidos como a la empresa en que trabaja o su país de residencia (aparezcan o no estos en la denominación del dominio utilizado). En este supuesto, a nuestro juicio, no existe duda de que la dirección de correo electrónico identifica, incluso de forma directa al titular de la cuenta, por lo que en todo caso dicha dirección ha de ser considerada como dato de carácter personal.

Ejemplos característicos de este supuesto son, como ya se dijo, los facilitados por la consultante, en los que se hace constar como dirección de correo electrónico el nombre y, en su caso, los apellidos del titular (o sus iniciales), correspondiéndose el dominio de primer nivel con el propio del estado en que se lleva a cabo la actividad y el dominio de segundo nivel con la empresa en que se prestan los servicios (pudiendo incluso delimitarse el centro de trabajo en que se realiza la prestación).

En consecuencia, a tenor de lo planteado en la consulta y de lo establecido en el articulado de la Ley orgánica 15/1999, los supuestos de direcciones de correo electrónico facilitados han de ser considerados datos de carácter personal, sin que ello implique que un diseño distinto a los planteados dejara de ostentar esa naturaleza.”

Por ello, el fichero se encontrará sometido a la Ley Orgánica, siendo ya irrelevante dar respuesta a las cuestiones planteadas en los apartados 3 y 4 de la consulta.

En cuanto al tratamiento de datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 5 de la consulta, no cabe duda alguna que tendrán dicha naturaleza los relacionados con las opciones de vida sexual que hayan sido marcadas por los afectados (apartado a), los relativos a la religión de los afectados (apartado b), así como los relacionados con su origen racial (apartado c).

Respecto de los datos contenidos en los restantes apartados, debe tenerse en cuenta el concepto de datos de salud. En este sentido, Si bien la Ley Orgánica 15/1999 se refiere expresamente a los datos de salud, considerándolos especialmente protegidos y limitando la posibilidad de su recopilación y cesión, no establece un concepto concreto de este tipo de datos.

Ello exige atender, para la delimitación del concepto establecido en la Ley Orgánica, por imperativo del artículo 10.2 de nuestra Constitución a las normas contenidas en Tratados Internacionales reguladoras de la Protección de Datos de carácter personal que hayan sido válidamente ratificados por España, pasando a formar parte de su ordenamiento interno, según dispone el artículo 1.5 del Código Civil.

En este contexto, tanto el artículo 8 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, como el artículo 6 del Convenio 108 del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981, ratificado por España en fecha 27 de enero de 1984, hacen referencia a los datos de salud como sujetos a un régimen especial de protección, de tal forma que, como indica el citado Convenio, tales datos "no podrán tratarse automáticamente a menos que el derecho interno prevea garantías adecuadas".

El apartado 45 de la Memoria Explicativa del Convenio 108 del Consejo de Europa viene a definir la noción de "datos de carácter personal relativos a la salud", considerando que su concepto abarca "las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo", pudiendo tratarse de informaciones sobre un individuo de buena salud, enfermo o fallecido. Añade el citado apartado 45 que "debe entenderse que estos datos comprenden igualmente las informaciones relativas al abuso del alcohol o al consumo de drogas".

En este mismo sentido, la Recomendación nº R (97) 5, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, referente a la protección de datos médicos afirma que "la expresión datos médicos hace referencia a todos los datos de carácter personal relativos a la salud de una persona. Afecta igualmente a los datos manifiesta y estrechamente relacionados con la salud, así como con las informaciones genéticas".

El apartado 38 de la mencionada Recomendación considera igualmente, siguiendo lo señalado en el Convenio 108 que la expresión "datos médicos debería incluir igualmente cualquier información que ofrezca una visión real

sobre la situación médica del individuo”, incluyendo datos como los referidos al “abuso de las drogas, abuso de alcohol y nicotina o consumo de drogas”.

De este modo, los datos meramente referidos a las condiciones antropométricas de una persona que no impliquen situaciones de salud extremas, no serían en principio considerados datos relacionados con su salud. Por este motivo, las descripciones contenidas en los apartados d) y e) no tendrían esa naturaleza.

En cuanto al consumo de tabaco y alcohol, a la vista de lo indicado en las anteriores normas, cabe apreciar que tanto el Convenio 108 como la Recomendación 97 (5) establecen una diferenciación entre los datos referidos al consumo de tabaco (nicotina, en la terminología de la Recomendación) o alcohol frente al consumo de drogas, en su terminología general.

De este modo, según las fuentes citadas, debería considerarse dato directamente vinculado con la salud aquel que reflejase, en relación con las sustancias estupefacentes en general, su mero consumo. Sin embargo, en el caso del consumo de alcohol o tabaco el dato referido al mero consumo, sin especificación de la cantidad consumida, no sería en principio un dato vinculado con la salud, revistiendo tal naturaleza el dato que reflejase la cantidad consumida, en caso de que el mismo significase un consumo abusivo, no siendo esta Agencia Española de Protección de Datos la competente para determinar en qué supuesto concurre tal circunstancia.

A tenor de lo indicado, limitándose el fichero a indicar si una persona consume estas sustancias, no lo hace o lo hace de modo ocasional, cabe considerar que los datos contenidos en los apartados f) y g) no aparecen vinculados con la salud de las personas.

En cuanto a las cuestiones planteadas en el apartado 6 de la consulta, ya se ha indicado que la imagen de una determinada persona física ha de ser necesariamente considerada como dato de carácter personal.

Por otra parte, en relación con el tratamiento de datos sensible, ya se ha indicado que se tratarían datos relacionados con la religión, origen racial y vida sexual de las personas, lo que impone, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.3 del Reglamento aprobado por Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, la imposición sobre el fichero de las medidas de nivel alto.

Por otra parte, debe indicarse que el acceso a los datos por parte de terceros distintos del personal de la organización constituye una cesión o comunicación de datos de carácter personal y no un mero acceso de usuario. Para que esta comunicación sea lícita, teniendo en cuenta la naturaleza de los datos tratados, deberá contarse con el consentimiento de los afectados (artículos 7.2, 7.3 y 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999), que deberá ser expreso y escrito en el caso de los datos relacionados con la religión profesada por los interesados (artículo 7.2).

Por el contrario, el control de accesos exigido por el artículo 24 del reglamento de medidas de Seguridad se refiere al acceso a los datos por parte de la organización del responsable del fichero. De este modo, únicamente debería aplicarse ese control a los usuarios del responsable, definidos por el artículo 2.2 del Reglamento como “sujeto o proceso autorizado para acceder a datos o recursos”.

Por lo que respecta a la información que debería contenerse en el registro, el Reglamento impone que “cada acceso se guardarán, como mínimo, la identificación del usuario, la fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado”, añadiéndose que “en el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la información que permita identificar el registro accedido”.

Esta Agencia ha venido considerando que la referencia a “registro accedido” debe entenderse realizada a los datos a los que el usuario ha podido tener acceso, siempre que se trate de datos para los que sea exigible la imposición de esta medida. De este modo, si el acceso se refiriese a todos los datos especialmente protegidos relacionados con un determinado sujeto bastaría indicar su identificación. En caso de que, por el contrario, el acceso sea particularizado a cada categoría de datos, deberá constar el dato específicamente accedido.

En cuanto a la aplicación del artículo 26, en mismo establece que “La transmisión de datos de carácter personal a través de redes de telecomunicaciones se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros”.

De este modo, podría resultar suficiente el establecimiento de procedimientos que impidan el acceso a la información por parte de terceros, mediante el establecimiento de dispositivos seguros de acceso a la información, que produzcan un efecto similar al derivado del cifrado de los datos.

Por último, en cuanto a la captación de datos a través de correo electrónico y foros, el tratamiento de los datos llevado a cabo por la consultante se encontrará sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 en caso de que se procediera al tratamiento del contenido de los mensajes, lo que según se indica no sucederá en el presente caso. No obstante, sí se encontrarán sometidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 los datos relacionados con la identificación de los usuarios de los servicios prestados por dicha entidad.